

NOMENCLATURA	: 1. [40]Sentencia
JUZGADO	: 7º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL	: C-5169-2021
CARATULADO	: BLIN/FISCO / CONSEJO DE DEFENSA DEL
ESTADO	

Santiago, treinta y uno de Julio de dos mil veinticuatro

VISTO:

A **folio 1**, con fecha nueve de junio de dos mil veintiuno, comparece don NELSON GUILLERMO CAUCOTO PEREIRA, abogado, en representación de don **MICHEL GEORGES BLIN VERNIER**, francés, ingeniero agrónomo, pasaporte de la República de Francia N°13BC19920, ambos con domicilio para estos efectos en calle Doctor Sótero del Río N°326, oficina 1104, comuna de Santiago, interponiendo demanda de indemnización de perjuicios en contra del **FISCO DE CHILE**, representado – en su calidad de Presidente del Consejo de Defensa del Estado- por Juan Antonio Peribonio Poduje, abogado, domiciliado en calle Agustinas N°1687, comuna de Santiago.

En cuanto a los hechos, sostiene que don Michel Georges Blin Vernier fue víctima de violaciones a sus derechos humanos, según lo estableció la Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech II, en su informe y nómina evacuados en el año 2011, figurando el demandante bajo el numeral 1.146 del listado de víctimas de prisión política y tortura reconocidas por dicha comisión de verdad.

Expone que el día 13 de septiembre de 1973, aproximadamente a las 10:00 hrs. de la mañana, en el Hotel Gran Palace, ubicado en calle Huérfanos



Foja: 1

Nº 1148, comuna y ciudad de Santiago, don Michel Georges Blin Vernier, ciudadano francés, de entonces 23 años de edad, fue detenido por funcionarios de Carabineros de Chile, junto a otras personas de sexo masculino que se encontraban en el referido hotel.

Tras su detención, la víctima y las demás personas detenidas fueron obligadas a subirse a un bus, el que los trasladó hasta una comisaría institucional, desconociendo don Michel Georges Blin Vernier a qué unidad en concreto correspondía esta.

Señala que en la referida comisaría, la víctima fue sometida por sus captores a tratos inhumanos, toda vez que debió mantener durante su cautiverio en aquella una posición física forzada, con las manos arriba y contra un muro, y las piernas abiertas durante horas.

Por la noche del mismo día 13 de septiembre de 1973, la víctima, junto a aproximadamente unas cincuenta personas, fueron trasladadas en un bus al Estadio Nacional, emplazado en la comuna de Ñuñoa, de esta ciudad. En dicho recinto, fue trasladada, junto a otros detenidos extranjeros, a un vestuario en donde permanecieron por algunos momentos, siendo en todo momento controlados por funcionarios militares.

Refiere que en el Estadio Nacional, la víctima fue sometida a torturas, consistentes en golpes de pie y de mano, en golpes con objetos -como por ejemplo, con la culata de las armas que portaban los militares- en todas las partes del cuerpo, y especialmente, en las zonas más sensibles. Además, la alimentación que se le proporcionó fue precaria, al igual como las condiciones en que permaneció al interior del señalado campo deportivo. En todo momento la víctima y sus compañeros de cautiverios eran amenazados por sus captores. También, fue sometido a interrogatorios por parte de los militares que lo custodiaban.

Relata que luego de diversas gestiones realizadas por la familia de la víctima ante funcionarios del Estado de Francia y ante organismos internacionales, finalmente, el día 27 de septiembre de 1973, aquella logró su libertad, siendo de inmediato trasladado hasta la Embajada de Francia en Santiago de Chile, lugar en el cual permaneció por una semana, para luego ser expulsado del país, rumbo a su Francia natal.



Foja: 1

A continuación, transcribe el testimonio de don Michel Georges Blin Vernier en relación a la detención, prisión política y tortura que sufrió a manos de agentes del Estado.

Concluye que los hechos criminales perpetrados en la persona del demandante perduran hasta el día de hoy y le afectan gravemente, sufriendo aún por el daño que le ocasionaron agentes del Estado de Chile, producto de los hechos que le correspondió vivir en el período en que estuvo privado de libertad, durante la dictadura cívico-militar.

En cuanto al derecho, en primer lugar, alega que los hechos relatados constituyen crímenes de lesa humanidad, según lo establecido en el Estatuto del Tribunal Militar de Nüremberg de 1945, estatuto que se ve confirmado por las resoluciones de la Asamblea General de la Organización de la Naciones Unidas de 13 de febrero y de 11 de diciembre, ambas de 1946, concepto que ha sido actualizado con la adopción del Estatuto de Roma, que establece la Corte Penal Internacional, y que fue aprobada en 1998. Sostiene que estos crímenes han hecho alzar un complejo normativo especial en el ámbito del Derecho Internacional, cuestión que resulta fundamental a la hora de resolver qué clase de responsabilidad le cabe al Estado de Chile. Al efecto, cita el pronunciamiento de la Iltna. Corte de Apelaciones de Santiago, en los autos caratulados “Ruz y otro con Fisco”, rol N° 4.464-01.

En segundo lugar, explica la responsabilidad del Estado analizada respecto a la Constitución Política de la República de 1980. Hace mención a lo dispuesto en el artículo 38 inciso 2°, que señala que cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por el Estado, podrá reclamar ante los tribunales de justicia.

Sostiene que el fundamento básico de esta responsabilidad legal o extracontractual del Estado está contenido en diversas disposiciones de rango constitucional, supraconstitucional y también legal, y todas ellas -cuando menos son normas propias del ámbito del derecho público. En el mismo sentido, cita jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema. Menciona que responsabilidad emana de la naturaleza misma del ente estatal, como persona jurídica compleja creada para la realización del bien común.



Foja: 1

En tercer lugar, refiere a la responsabilidad del Estado a la luz del derecho internacional. Agrega que el Estado de Chile mediante la suscripción de declaraciones y convenciones a nivel internacional, ha ido adquiriendo de forma progresiva una serie de obligaciones internacionales, que tienen como marco la obligación general de “respeto de los derecho esenciales del hombre” por parte de los Estados. Señala que los Estados tienen una obligación de resultado, cual es, la efectiva vigencia de los derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales, por lo que la responsabilidad del Estado por violación a los

derechos humanos es una cuestión objetiva, toda vez que el ilícito por violaciones a los derechos fundamentales se produce en el momento en que el Estado actúa en violación de una norma obligatoria, sin necesidad de que exista falta o culpa por parte del agente.

En cuarto lugar, alega la improcedencia de aplicar las normas y principios del derecho privado a los casos de responsabilidad del Estado por delitos de lesa humanidad. Aclara que en el caso de marras es improcedente aplicar las reglas propias del derecho de daños, contenidas en el Código Civil, toda vez que dicho estatuto se construye sobre premisas y principios diferentes a los del derecho público y al derecho internacional de los derechos humanos. Al efecto, hace mención a los artículos 27 y 28, ambos de la Convención de Viena sobre el Derecho de los tratados. Agrega que en estos autos no se persigue una reparación para un delito común y que las normas consagradas en el Código de Bello fueron dictadas en un contexto en donde los mayores riesgos, peligros y daños parecían venir del comportamiento de personas ebrias, de adolescentes con mala educación y hábitos viciosos, edificios en ruinas, etc.

En quinto lugar, expone que al atenerse a las normas de carácter público e internacional, implica reconocer la autonomía y orgánica particularidad del complejo normativo de los derechos humanos, de modo tal que no sólo cabe afirmar el carácter objetivo de la responsabilidad del Estado, sino que, además, la imprescriptibilidad de las acciones patrimoniales derivadas de las violaciones a los derechos humanos. A mayor abundamiento, cita lo dispuesto en los artículos 4, 5 y 7 de la Convención Americana sobre Derechos



Foja: 1

Humanos y los N° 1 y N° 7 del artículo 19 de la Carta Fundamental. Añade el fundamento en virtud del cual un Estado queda obligado a la ejecución de una reparación determinada frente a una persona que haya sido víctima de violaciones a sus derechos fundamentales, mediante ilícitos que la conciencia jurídica universal considera intolerables, se rige por normas y principios del derecho público y derecho internacional de los derechos humanos, logrando sujetar, dentro de sus esferas, por vía de la progresividad normativa, un sistema de responsabilidad autónomo que se conforma transversalmente, desde los primeros acuerdos interestatales.

Seguidamente, menciona 123 fallos dictados por la Excma. Corte Suprema en los cuales se ha declarado la imprescriptibilidad de la acción civil, cuando ésta emana de un crimen de lesa humanidad y/o de un crimen de guerra, en tanto crímenes de derecho internacional.

Luego, explica el daño provocado y el monto a indemnizar, manifestando que en estos autos existe un daño de carácter moral que se expresa en dolor, sufrimiento, angustia, rabia e impotencia ante una situación injusta e ilegítima, que, como víctima le ha tocado soportar. Al efecto, hace mención a la opinión de diversos profesores para conceptualizar el daño moral, entre ellos, Alessandri, Diez y Domínguez Águila. Igualmente, cita lo expresado por la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago y la Excma. Corte Suprema.

Respecto la jurisprudencia internacional, afirma que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido la idea de que el daño moral no requiere prueba en sede jurisdiccional. Insiste que en las sentencias dictadas por esta Corte se constata que una víctima de violaciones graves a sus derechos humanos, tales como, las afectaciones a su derecho a la vida o a la integridad personal o la libertad ambulatoria, no tiene que asumir como carga procesal la tarea de probar el daño moral que refiere haber sufrido.

En definitiva, solicita se condene a la demandada por la suma de \$150.000.000 (ciento cincuenta millones de pesos) por concepto de daño moral, o bien en su defecto, a la suma que el tribunal considere en justicia, cantidad que deberá ser reajustada de acuerdo a la variación del IPC, desde la fecha de interposición de esta demanda y el pago efectivo de la



Foja: 1

indemnización, junto con los intereses legales correspondientes durante el mismo período y las costas de la causa.

A **folio 12**, con fecha nueve de septiembre de dos mil veintiuno, se notificó la demanda.

A **folio 13**, con fecha veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, comparece doña RUTH ISRAEL LOPEZ, cédula nacional de identidad número 9.772.243-9, abogada Procurador Fiscal de Santiago, del Consejo de Defensa del Estado, por el Fisco de Chile, ambos domiciliados en Agustinas N° 1225, piso 4°, comuna de Santiago, contestando la demanda de autos, solicitando el rechazo de la acción de indemnización de perjuicios deducida por don Michel Georges Blin Vernier en su calidad de víctima de prisión política y tortura, en base a las excepciones, defensas y alegaciones que expone.

En primer lugar, opone la excepción de reparación integral, alegando la improcedencia de la indemnización solicitada por haber sido ya indemnizado el demandante, alegando que la Ley N° 19.123, así como otras conexas, como la Ley N° 19.992, han establecido distintos mecanismos mediante los cuales se ha concretado la compensación a víctimas de violaciones a los derechos humanos y a familiares directos de éstas, mediante tres tipos de compensaciones: a) Reparaciones mediante transferencias directas de dinero; b) Reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y c) Reparaciones simbólicas. Explica que por medio de estos tres tipos de reparaciones se ha concretado el objeto de nuestro particular proceso de justicia transicional, que en lo que a este acápite respecta, busca no otra cosa que la precisa reparación moral y patrimonial de las víctimas.

Luego, analiza cada una de estas compensaciones, señalando, respecto a la reparación mediante transferencias directas de dinero, que en término de costos generales para el Estado de Chile, este tipo de indemnizaciones ha significado a diciembre de 2019, un desembolso total de \$992.084.910.400, que corresponden a las siguientes indemnizaciones: a) Pensiones: la suma de \$247.751.547.837.- como parte de las asignadas por la Ley 19.123 (Comisión Rettig) y de \$648.871.782.936.- como parte de las asignadas por la Ley 19.992 (Comisión Valech); b) Bonos: la suma de \$41.910.643.367- asignada



Foja: 1

por la Ley 19.980 (Comisión Rettig) y de \$23.388.490.737.- por la ya referida Ley 19.992; y c) Desahucio (Bono compensatorio): la suma de \$1.464.702.888.- asignada por medio de la Ley 19.123.- d) Bono Extraordinario (Ley 20.874): la suma de \$23.388.490.737.

Indica que el demandante ha recibido beneficios pecuniarios al amparo de la Ley N° 19.992, y sus respectivas modificaciones, estableciendo esta última una pensión anual de reparación y otorgó otros beneficios a favor de las personas afectadas por violaciones de derechos humanos individualizados en el anexo “Listado de prisioneros políticos y torturados” de la Nómina de personas Reconocidas como Víctimas, así, se estableció una pensión anual reajutable de \$1.353.798 para beneficiarios menores de 70 años; de \$1.480.284 para beneficiarios de 70 o más años de edad y de \$1.549.422, para beneficiarios mayores de 75 años de edad. Adicionalmente, consigna que el actor recibió en forma reciente el Aporte Único de Reparación Ley 20.874, por \$1.000.000.

En cuanto a las reparaciones mediante asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas, explica que se concedió a los beneficiarios de la Ley N° 19.234, como de la Ley N° 19.992, el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS), ofreciéndose asimismo el apoyo técnico y de rehabilitación física para la superación de lesiones físicas que sean producto de la prisión política o tortura.

Adicionalmente, se incluyeron entre dichos beneficios, aquellos de carácter educacional, consistentes en la continuidad y gratuidad de los estudios básicos, medios o superiores, ello a cargo de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, además de haberse concedido beneficios en vivienda.

Finalmente, y en lo relativo a las reparaciones simbólicas, refiere que parte importante de la reparación por los daños morales causados a las víctimas de DD.HH se realiza a través de actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas violaciones, destacando la ejecución de diversas obras, como las siguientes: a) La construcción del Memorial del Cementerio General en Santiago en el año 1993; b) El



Foja: 1

establecimiento, mediante el Decreto N° 121, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 10 de octubre de 2006, del Día Nacional del Detenido Desaparecido; c) La construcción del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos; d) El establecimiento, mediante la Ley N° 20.405, del Premio Nacional de los Derechos Humanos; e) La construcción de diversos memoriales y obras a lo largo de todo el país; entre otros.

Sostiene que de todo lo expresado se puede concluir que los esfuerzos del Estado de Chile, por reparar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, han cumplido todos los estándares internacionales de justicia transicional y han provisto de indemnizaciones acordes a nuestra realidad económica, que efectivamente han apuntado a compensar a las víctimas por los daños, tanto morales como patrimoniales, sufridos a consecuencia de tales violaciones.

Así las cosas, estima que tanto las indemnizaciones que se solicitan en estos autos como el cúmulo de reparaciones antes indicadas pretenden compensar los mismos daños ocasionados por los mismos hechos; de esta forma, los ya referidos mecanismos de reparación han compensado aquellos daños, no procediendo, por ello, ser compensados nuevamente, por lo que, estando las acciones interpuestas en autos basadas en los mismos hechos y pretendiendo indemnizar los mismos daños que han inspirado precisamente el cúmulo de acciones reparatorias enunciadas, opone la excepción de reparación integral por haber sido ya indemnizado el demandante de la presente causa.

En subsidio de lo anterior, opone la excepción de prescripción extintiva de la acción deducida, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil, en relación con lo dispuesto en el artículo 2497 del mismo Código, solicitando que, por encontrarse prescrita, se rechace la demanda en todas sus partes.

Ello por cuanto del relato del demandante la detención ilegal y tortura que sufrió ocurrieron entre el 13 y 27 de septiembre de 1973, en circunstancias que la demanda de autos fue notificada a su parte con fecha 9 de septiembre de 2021, habiendo transcurrido con creces el plazo de prescripción establecido en el artículo 2332 del Código Civil, aun si se entiende suspendido el referido plazo legal durante todo el período de la dictadura militar.



Foja: 1

En subsidio y para el caso de estimarse que el artículo 2332 del Código Civil no es aplicable al caso de autos, alega la prescripción extintiva ordinaria de acciones y derechos de cinco años, que previenen los artículos 2514 y 2515 del Código Civil, por cuanto entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a la indemnización y la fecha de notificación de la demanda, habría transcurrido en exceso dicho plazo legal.

Expone que la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre declaración explícita, la que en este caso no existe, siendo la prescripción una institución universal y de orden público, donde las normas del Título XLII del Libro IV del Código Civil, que la consagran se han estimado siempre de aplicación general a todo el derecho y no sólo al derecho privado.

Indica que ninguno de los instrumentos internacionales contempla la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de delitos o crímenes de lesa humanidad o que prohíba o impida la aplicación del derecho interno en esta materia, como la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad, los Convenios de Ginebra de 1949, la Resolución N°3.074, de 3 de diciembre de 1973, de la Asamblea General de las Naciones Unidas o la Convención Americana de Derechos Humanos.

Concluye que no habiendo, en consecuencia, norma expresa de derecho internacional de derechos humanos, debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno, que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, y no pudiendo tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, el Tribunal no debe apartarse del claro mandato de la ley interna al resolver esta contienda y aplicar las normas contenidas en los artículos 2332 y 2497 del Código Civil, que establecen las reglas sobre prescriptibilidad de la responsabilidad patrimonial del Estado, debiendo rechazar la demanda por encontrarse prescrita la acción deducida.

En tercer término, en cuanto al daño e indemnización reclamada, en subsidio de las defensas y excepciones planteadas precedentemente, controvierte el monto solicitado, atendida la naturaleza de la indemnización solicitada, considerando excesiva la suma, haciendo presente que la



Foja: 1

indemnización de perjuicios tiene por objeto restablecer el equilibrio destruido por el hecho ilícito, otorgando a la víctima un valor equivalente a la cuantía del daño sufrido, para ponerla en el mismo estado que tenía antes del acto dañoso, por ende, la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino sólo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva, debiendo atenerse a la extensión del daño sufrido por la víctima, siendo las cifras pretendidas en la demanda excesivas teniendo en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile en esta materia y los montos promedios fijados por nuestros tribunales de justicia.

En cuarto lugar y en forma subsidiaria, alega que en todo caso en la fijación del daño moral por los hechos esgrimidos en autos, el tribunal debe considerar todos los pagos recibidos por el actor a través de los años por parte del Estado conforme a las leyes de reparación (19.234, 19.992, sus modificaciones y demás normativa pertinente), y que seguirán percibiendo a título de pensión, y también los beneficios extrapatrimoniales que estos cuerpos legales contemplan, pues todos ellos tienen por objeto reparar el daño moral, ya que de no accederse a esta petición subsidiaria implicaría un doble pago por un mismo hecho, lo cual contraría los principios jurídicos básicos del derecho en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea indemnizado dos veces.

Finalmente, hace presente la improcedencia de los reajustes e intereses del modo en que han sido solicitados por el demandante en su libelo, por cuanto los reajustes sólo pueden devengarse en el caso de que la sentencia que se dicte en la causa acoja la demanda y establezca esa obligación, y además mientras no exista sentencia firme o ejecutoriada, ninguna obligación tiene de indemnizar, y por tanto, no existe ninguna suma que deba reajustarse. Respecto de los intereses, señala que el artículo 1551 del Código Civil establece expresamente que el deudor no está en mora sino cuando ha sido judicialmente reconvenido y ha retardado el cumplimiento de la sentencia, por



Foja: 1

consiguiente, en el hipotético caso de que se decida acoger la acción de autos y se condene al pago de una indemnización de perjuicios, tales reajustes e intereses sólo podrán devengarse desde que la sentencia condenatoria se encuentre firme o ejecutoriada y su representado incurra en mora.

En virtud de todo lo anterior, solicita se rechace la acción indemnizatoria en todas sus partes, con costas; o, en subsidio, rebajar sustancialmente el monto indemnizatorio pretendido.

A folio 17, con fecha siete de octubre de dos mil veintiuno, la parte demandante evacuó el trámite de la réplica, haciendo las siguientes consideraciones.

Añade que el hecho de haber obtenido pensiones de reparación con arreglo a la ley N° 19.123, no es óbice para que se indemnice mediante un monto fijado por un tercero imparcial, que es un tribunal de la República. Sostiene que la preceptiva invocada por el Fisco no contempla incompatibilidad alguna con las indemnizaciones que se ventilan en autos y no es dable presumir que se diseñó para cubrir todo daño moral inferido a las víctimas de atentados a los derechos humanos porque se trata de formas distintas de reparación.

En lo relativo a la excepción de prescripción, añade que es erróneo sostener que las únicas reglas que existen en Chile para regular la responsabilidad del Estado son aquellas contenidas en el Código Civil. Asegura que aquella premisa viene aparejada de la negación rotunda de la validez y eficacia de otras normas jurídicas de carácter constitucional, administrativo e internacional que, incluso ya han sido aplicadas por los mismos tribunales superiores de justicia. Al efecto, hace presente los fallos dictados en los autos caratulados “Caro Silva con Fisco de Chile” y “Bustos con Fisco de Chile”.

Luego, manifiesta que la argumentación de la demandada resulta improcedente a la luz de la denominada doctrina de los actos propios así como a la buena fe que debe orientar las defensas de las partes, toda vez que se alega en autos la “inexistencia de un régimen especial de responsabilidad del Estado” basado en que “el derecho común en materia de responsabilidad extracontractual, se encuentra contenido en nuestro Código Civil”. Asevera



Foja: 1

que esta alegación es incompatible y contraria a la línea de defensa que históricamente ha planteado el Consejo de Defensa del Estado sosteniendo en latas argumentaciones los poderes exorbitantes de la Administración reclamando privilegios que se apartan de la noción clásica del Derecho Público, donde sí reconoce la existencia de normas especiales que regulan la actividad administrativa, abogando por la teoría de los poderes implícitos por la función de servicio público que desarrolla.

Posteriormente, afirma que la acción constitucional establecida en el artículo 38° inciso 2° de la Constitución Política de la República no establece plazo de prescripción, así como el demandado no reconoce la pertinencia en este asunto de las reglas de responsabilidad contenidas en la “Convención Americana sobre Derechos Humanos”, pues insiste en sostener una interpretación antojadiza y/o reduccionista no solo del ordenamiento jurídico interno, sino que también del marco regulatorio internacional. Al efecto, cita variada jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia.

Destaca que la ausencia de norma expresa que regule la prescripción extintiva de las acciones de reparación por violación de los derechos humanos de las personas debe ser resuelta e integrada mediante la interpretación armónica de las normas y principios del Derecho Público tanto como del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, quedando proscrita la aplicación analógica de los artículos 2332, 2514 y 2515 del Código Civil. Hace mención a distintos fallos emitidos por la Excma. Corte Suprema, esgrimiendo que esta ha variado el criterio otorgándole el carácter de imprescriptibles a las acciones civiles que derivan de los crímenes de Lesa Humanidad atentatorios contra los Derechos Humanos concediendo así la correspondiente indemnización. Agrega que la misma Excma. Corte Suprema ha señalado que tratándose de un delito de lesa humanidad cuya acción penal persecutoria es imprescriptible.

Finalmente, expone que el monto solicitado se encuentra totalmente ajustado a la justicia, ya que no hay dinero que supla el dolor experimentado por la demandante, sin perjuicio que si le parece excesivo al tribunal, este fije la suma que disponga.



Foja: 1

A folio 19, con fecha veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, la parte demandada evacuó el trámite de la réplica, reiterando las alegaciones realizadas en el escrito de contestación de la demanda.

A folio 22, con fecha diez de junio de dos mil veintidós, se recibió la causa a prueba, fijándose como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos sobre los que deberá recaer ésta.

A folio 69, con fecha ocho de mayo de dos mil veinticuatro, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha nueve de junio de dos mil veintiuno, comparece don NELSON GUILLERMO CAUCOTO PEREIRA, en representación de don MICHEL GEORGES BLIN VERNIER, quien viene en deducir demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, representado por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, don Juan Antonio Peribonio Poduje, solicitando se le condene al demandado al pago de \$150.000.000 (ciento cincuenta millones de pesos), por los daños sufridos como víctima de crímenes de lesa humanidad.

Funda su solicitud en las razones de hecho y de derecho expuestos en la parte expositiva de la sentencia, las cuales se dan por reproducidas para todos los efectos legales.

SEGUNDO: Que, con fecha veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, comparece doña Ruth Israel López, abogada Procuradora Fiscal de Santiago del Consejo de Defensa del Estado, contestando la demanda por el Fisco de Chile, solicita el rechazo de la acción de indemnización de perjuicios deducida por don Michel Georges Blin Vernier, en base a las excepciones, defensas y alegaciones relatadas en la parte expositiva de la sentencia, las que se dan por reproducidas para todos los efectos legales.

TERCERO: Que, con fecha diez de junio de dos mil veintidós, se recibió la causa a prueba, estableciéndose como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos los siguientes: 1°. – Existencia y circunstancias de los hechos referidos por la actora en la demanda; 2°. – Efectividad de que ésta ha sufrido los daños o perjuicios señalados en el libelo. Naturaleza, causales y monto de éstos; 3°. - Efectividad de que, si como consecuencia de los hechos



Foja: 1

invocados por le actor en su libelo, se produjeron daños o perjuicios imputables al Fisco de Chile. En la afirmativa, causas, naturaleza y monto de los mismos; 4°. - Efectividad de haberse indemnizado al demandante el daño sufrido. En su caso, monto y beneficios entregados al actor y daños supuestamente compensados.; 5°. - Efectividad de encontrarse prescrita la acción civil de indemnización de perjuicios incoada.

CUARTO: Que, a fin de acreditar los fundamentos de su acción, la parte demandante rindió la siguiente prueba:

I.- Documental: **1)** Acta de nacimiento de don Michel Georges Blin Vernier, emanado del Oficio delegado del Estado Civil de la Administración Francesa; **2)** Copia del pasaporte N° 13BC19920, correspondiente a don Michel Georges Blin Vernier, emanado de la Administración Francesa; **3)** Copia simple de los documentos reunidos por la Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y víctimas de Prisión Política y Tortura, en el proceso de reconocimiento en su calidad de víctima de violaciones de sus derechos humanos a don Michel Georges Blin Vernier, todos ellos entregados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos; **4)** Certificado emitido por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, de fecha 19 de mayo de 2020, suscrito por doña Marcela González Cerda del “Área de memoria, archivos y documentación”, dando cuenta de la calidad de víctima reconocida al señor Michel Georges Blin Vernier por parte de la Comisión Valech; **5)** Copia de la Sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema, Rol de ingreso N° 1092-15, de fecha 14 de septiembre del año 2015; **6)** Copia de la Sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema, Rol de ingreso N° 8105-2018, de fecha 13 de junio de 2018; **7)** Copia sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de fecha 29 de noviembre de 2018, en causa caratulada “Órdenes Guerra y otros vs Chile”, CDH-2-2017; **8)** Copia de Evaluación Psicológica del Sr. Michel Blin, confeccionado por la señora Pascale Le Bourece, debidamente apostillado (según convenio de la Haya del 5 de octubre de 1961, y traducido por Laurent Le Menec, traductor jurado inscrito en la lista de expertos cerca del tribunal de Apelación de Rennes 35000, Francia; **9)** Copia de Testimonio -sobre el daño- de la señora Francoise Murice, profesora de economía y psicóloga clínica, de fecha 14 de



Foja: 1

mayo de 2022, debidamente apostillado (según convenio de la Haya del 5 de octubre de 1961, y traducido por Laurent Le Menec, traductor jurado inscrito en la lista de expertos cerca del tribunal de Apelación de Rennes 35000, Francia; **10)** Copia de testimonio denominado Secuelas de la Tortura, del propio actor Michel Blin, debidamente apostillado (según convenio de la Haya del 5 de octubre de 1961, y traducido por Laurent Le Menec, traductor jurado inscrito en la lista de expertos cerca del tribunal de Apelación de Rennes 35000, Francia; **11)** Copia de Testimonio -sobre el daño- de la señora Odile Winkel, de fecha 1 de marzo de 2021, debidamente apostillado (según convenio de la Haya del 5 de octubre de 1961, y traducido por Laurent Le Menec, traductor jurado inscrito en la lista de expertos cerca del tribunal de Apelación de Rennes 35000, Francia; **12)** Copia de Testimonio -sobre el daño- del señor Jean Francois, de fecha 30 de marzo de 2022, debidamente apostillado (según convenio de la Haya del 5 de octubre de 1961, y traducido por Laurent Le Menec, traductor jurado inscrito en la lista de expertos cerca del tribunal de Apelación de Rennes 35000, Francia; **13)** Copia de Certificado Médico, de fecha 11 de octubre de 2022, suscrito por el Dr. Yves Malledan, debidamente apostillado (según convenio de la Haya del 5 de octubre de 1961, y traducido por Laurent Le Menec, traductor jurado inscrito en la lista de expertos cerca del tribunal de Apelación de Rennes 35000, Francia; **14)** Copia de Testimonio -sobre el daño- de señor Ricardo Parvex Alfaro, de fecha 13 de octubre de 2022, debidamente apostillado (según convenio de la Haya del 5 de octubre de 1961, y traducido por Laurent Le Menec, traductor jurado inscrito en la lista de expertos cerca del tribunal de Apelación de Rennes 35000, Francia.

II.- Testimonial: **1)** Daniel Alfredo Céspedes Vargas, cédula nacional de identidad número 5.637.277-6.

QUINTO: Que, por su parte, la parte demandada rindió la siguiente prueba instrumental:

- 1)** Oficio ORD.: DSGT N° 4792-4084, emitido por el Instituto de Previsión Social, respecto de los beneficios de reparación Leyes N°s 19.992 y 20.874, emitido con fecha 12 de noviembre de 2021.



Foja: 1

SEXTO: Que, no habiendo sido discutido por el Fisco de Chile los hechos en que se basa la demanda, los cuales además se ven refrendados por los elementos probatorios aportados al juicio, es posible tener por establecidos como hechos no controvertidos, los siguientes:

1.- Que don Michel Georges Blin Vernier, de nacionalidad francesa, fue detenido el 13 de septiembre de 1973 en el Hotel Gran Palace ubicado en calle Huérfanos N°1148 de la comuna de Santiago por funcionarios de Carabineros de Chile, fue trasladado hasta una comisaría institucional y posteriormente al Estadio Nacional, lugares donde fue torturado por sus captores, sufriendo privación de libertad hasta el día 27 de septiembre de 1973.

2.- Que don Michel Georges Blin Vernier se encuentra calificado como víctima en el listado de prisioneros políticos y torturados, elaborado por la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura.

SÉPTIMO: Que, a fin de acreditar el hecho a probar número dos fijado por el tribunal, esto es, la naturaleza y monto de los perjuicio que habría sufrido don Michel Georges Blin Vernier, y si bien la demandada no ha cuestionado la configuración del daño moral padecido por el demandante -sino únicamente la suma pedida a su respecto- se acompañó prueba instrumental, la cual no fue objetada por la contraria y tuvo la aptitud para probar la existencia y naturaleza del daño moral provocado al demandante a causa de la detención ilegal, torturas y encarcelamiento que sufrió durante la dictadura militar.

Es así como los antecedentes reunidos por la Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, dan cuenta de conductas por parte de agentes del Estado hacia don Michel Blin Vernier constitutivas de torturas, como lo es la aplicación de golpes en diferentes partes del cuerpo, amenazas, mantenerlo sin alimentación suficiente y en condiciones precarias, que significaron en el demandante secuelas físicas, padeciendo de bronquitis aguda, angina roja, contusiones en las piernas con edemas de los tobillos y múltiples equimosis.

Aquellos acontecimientos también implicaron en el demandante secuelas psicológicas como pérdida de memoria postraumática, trastornos del sueño con pesadillas e insomnios, varios síntomas psicosomáticos, angustia,



Foja: 1

dolor, entre otros, dando cuenta de aquello la evaluación psicológica emitida por la psicóloga clínica doña Pascale Le Bource de fecha 4 de julio de 2022, en la ciudad de Lannion, Francia, traducido al español, señalando que la detención y las experiencias vividas en el marco del golpe de estado acaecido en Chile en 1973, dejaron huellas profundas en el psiquismo de don Michel Georges Blin Vernier.

OCTAVO: Que, siendo el fundamento de la demanda la violación a los derechos humanos durante el periodo de la dictadura militar, es preciso mencionar que el presente caso debe ser abordado desde la situación de conflicto que vivía el Estado de Chile durante aquél periodo, siendo de público conocimiento que acaecieron durante esta transición violaciones masivas a los derechos humanos, existiendo obligación por parte del Estado de Chile de reconocer y brindar una reparación íntegra en esta materia, toda vez que aquella obligación deriva de lo que prevé la actual Constitución Política de la República en sus artículos 5 y 6, los cuales incorporan a nuestro ordenamiento jurídico interno los principios generales del Derecho Internacional y la normativa de los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes relativa a los derechos humanos, siendo un deber de los órganos del Estado descartar normas que sean contrarias a la Carta Fundamental.

Entre otras, las normas internacionales que se encuentran incorporadas a nuestro sistema normativo interno está la Convención Americana de Derechos Humanos, desprendiéndose de sus artículos 1.1 y 63.1 la obligación del Estado de reparar con el pago de una justa indemnización a la parte lesionada por una vulneración a los derechos y libertades por ella reconocidos, no pudiendo el Estado de Chile, conforme el artículo 27 de la Convención de Viena, desconocer esta obligación, sino que por el contrario, debe respetarlos y promoverlos, haciendo efectivo los derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales.

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 2.3^a, permite que “Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo”, lo que supone buscar plena reparación, que es concordante



Foja: 1

con lo consagrado en el principio 15 de los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 2005.

De esta forma, la responsabilidad del Estado por violación a los derechos humanos nace al momento en que con su actuar infringe los límites que señalan los derechos humanos como atributos inherentes a la dignidad de la persona, como la libertad o la integridad física y/o psíquica.

Finalmente mencionar que la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, donde en su artículo 3 dispone que la administración del Estado está a servicio de la persona humana, siendo su finalidad promover el bien común, y uno de los principios a los que debe sujetar su acción es el de responsabilidad; siendo consecuente con ello el artículo 4 de la misma ley, que prescribe que “El Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones (...)”, concordante con lo que dispone el artículo 38 de la Constitución Política de la República.

Todo lo anterior permite concluir que el daño causado por la conducta ilícita de los funcionarios o agentes del Estado autores de los ilícitos de lesa humanidad debe ser indemnizado por el Estado.

NOVENO: Que, en cuanto a la denominada excepción de reparación integral opuesta por la demandada, por haber sido resarcido el actor conforme a la Ley N° 19.123, así como otras conexas, como la Ley N° 19.992, cabe señalar que si bien consta en Ordinario N° 4792-4084, emitido por el Instituto de Previsión Social, que el señor Michel Blin Vernier ha recibido un total beneficios concedidos en las Leyes N° 19.992 y 20.874 \$22.472.415, teniendo una pensión actual Valech de \$212.919, lo cierto es que tales beneficios no son incompatibles con las indemnizaciones que por esta vía se solicitan, rechazándose en definitiva esta excepción.

Aquello por cuanto las mencionadas leyes por el Fisco de Chile si bien corresponden a un reconocimiento del Estado de Chile de su deber de reparar



Foja: 1

el daño causado a víctimas de violaciones a los derechos humanos o a sus familiares directos, en modo alguno impiden ejercer el legítimo derecho de todo ciudadano afectado por el actuar doloso de agentes del Estado de obtener una indemnización distinta de una reparación de carácter meramente asistencial, que es lo que establecen las leyes aludidas, sin desconocer que tales beneficios constituyen un esfuerzo del Estado de reparar el daño moral experimentado por aquellas víctimas, objetivo resarcitorio coincidente con la presente vía jurisdiccional pero no incompatible.

A mayor abundamiento, cabe señalar que los medios voluntarios asumidos por el Estado y fijados en las leyes N° 19.123, 19.980, 19.992, 20874, entre otras, en modo alguno importan una renuncia o prohibición para que las víctimas acudan a la sede jurisdiccional a fin de que ésta, por los medios que autoriza la ley, declare la procedencia de una reparación por el daño moral provocado por agentes del Estado, los que en ejercicio de su función pública, durante un período de extrema anormalidad institucional representando al gobierno de la época, abusaron claramente de su potestad y representación, dando lugar a los agravios a los derechos humanos de diversas personas que tenían una determinada visión política, cual es lo acontecido en la especie.

Por lo expuesto, parece también razonable que la reparación que haya hecho el Estado en relación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos no puede dejar de considerarse al momento de determinar el monto de los perjuicios, ya que estas medidas tienen un efecto en la extensión del daño cuya indemnización ahora se demanda.

En definitiva, será rechazada la excepción de reparación integral opuesta por la parte demandada.

DÉCIMO: Que, por otra parte, la demandada alega la prescripción de la acción de 4 años contemplada en el artículo 2332 del Código Civil, y, en subsidio, de 5 años establecida en el artículo 2515 del mismo cuerpo normativo.

Al efecto, es necesario tener en consideración lo dispuesto en el mencionado artículo 5 de la Constitución Política de la República que prescribe que el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto



Foja: 1

a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, y que es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, por cuanto esta disposición constitucional permite la incorporación al derecho nacional de las obligaciones contempladas en los instrumentos internacionales que recogen principios generales del derecho humanitario, entre los cuales se cuenta la obligación de indemnizar íntegramente los daños cometidos por violaciones de los derechos humanos, la que entonces adquiere rango constitucional.

Teniendo presente lo anterior, la prescripción extintiva de las acciones deducidas por el demandante no puede decidirse sobre la base de las disposiciones del Código Civil, toda vez que este cuerpo normativo busca regular las obligaciones que surgen para los sujetos por un concurso real de voluntades, un hecho voluntario de la persona que se obliga, un hecho que ha inferido daño o injuria a otra persona o por disposición de la ley, resolviendo situaciones de relativa equivalencia o de igualdad, mientras que el Estado, respecto de quienes habitan dentro de sus fronteras y quedan por ende sujetos a su jurisdicción, no actúa respecto de ellos en igualdad, se relaciona con las personas desde su posición de autoridad, como garante de los derechos fundamentales de que las personas son titulares.

Es por ello que el estatuto jurídico comprendido y conformado por el derecho común, de donde emana la norma de prescripción invocada por la demandada, resulta insuficiente para resolver acerca de la prescripción de las acciones que emanan del hecho ilícito en cuestión, cual es, la comisión de crímenes de lesa humanidad y la consecuente necesidad de reparación, la acción indemnizatoria en tal caso queda de cargo de las normas que emanan del derecho internacional de derechos humanos y del ius cogens o reglas imperativas de derecho internacional que protege valores esenciales compartidos por la comunidad internacional.

Dado que no existe norma internacional expresa, incorporada a nuestro ordenamiento jurídico, que establezca la imprescriptibilidad genérica de acciones orientadas a obtener el reconocimiento de la responsabilidad del Estado por delitos de lesa humanidad, de los variados tratados internacionales



Foja: 1

suscritos por Chile, como los ya mencionados, es posible concluir que ante las violaciones de derechos fundamentales, anteriores y superiores estos al Estado mismo, y nuestra Constitución, en cumplimiento de sus obligaciones de respetar, garantizar y no discriminar, la aplicación que se haga del derecho interno a la luz de los tratados internacionales debe conducir a darles seguridad y eficaz protección a los derechos, reconociendo, declarando y potenciando la vigencia de éstos, debiendo por tanto el Estado cumplir con su obligación no solo de investigar y sancionar los hechos que constituyen violaciones a los derechos humanos, sino que reparar a las víctimas de aquellos en su integridad.

De esta manera, se concluye que la acción resarcitoria que nace de la comisión de delitos de lesa humanidad es imprescriptible, de modo que siendo el hecho generador del daño que se invoca la violación de derechos humanos, no resultan atingentes las normas del derecho interno previstas en el Código Civil sobre prescripción de las acciones civiles resarcitorias comunes, de naturaleza meramente patrimonial, ya que existe un estatuto normativo internacional que ha sido reconocido por nuestro país al efecto, los que deben primar por sobre las normas civiles internas.

Los razonamientos anteriores conducen al rechazo de la excepción de prescripción enarbolada por la parte demandada.

UNDÉCIMO: Que, descartadas las alegaciones realizadas por la demandada, corresponde determinar si concurren los presupuestos que hacen procedente la indemnización de perjuicios reclamada, atendida la normativa mencionada y los hechos establecidos por parte del Tribunal.

En su libelo la parte demandante persigue la indemnización del daño moral, que corresponde al sufrimiento que le provocó la experiencia de la detención, tortura y prisión política, la cual se extendió por 14 días, en un país desconocido, sin conocimiento del contexto sociopolítico de la época ni manejo del idioma.

DUODÉCIMO: Que, habiéndose establecido que el daño causado por la conducta ilícita de los funcionarios o agentes del Estado autores de los ilícitos de lesa humanidad debe ser indemnizado por el Estado, por tanto hace responsable al Estado, procede determinar la cuantía del daño moral que



Foja: 1

reclama el actor, toda vez que su existencia fue analizada en el considerando séptimo.

El daño moral será entendido como una lesión efectuada culpable o dolosamente, que significa molestias en la seguridad personal del afectado, en el goce de sus bienes o en un agravio a sus afecciones legítimas, de un derecho subjetivo de carácter inmaterial e inherente a las personas e imputable a otra.

En la especie, atendido los hechos asentados y considerando la gravedad de las violaciones a derechos humanos tan esenciales como la libertad y la integridad física y psíquica a que fue sometido el demandante con motivo de su detención, tortura y prisión política por quien está llamado constitucionalmente a resguardarlos, el hecho de hallarse en un estado de vulnerabilidad, el dolor, las amenazas y el daño físico y psíquico provocados, como se desprende de la prueba aportada al juicio, que importa un sufrimiento corporal y psíquico que se constituye como un dolor de la persona constitutivo de daño moral, el cual debe ser resarcido.

Lo anterior no puede si no ser analizado en su contexto, como se ha indicado, debido que es posible presumir que el temor ocasionado por las circunstancias de la época naturalmente incrementó dicha aflicción, cuyas secuelas psicológicas son de aquellas que perduran de por vida, truncando el normal desarrollo, debido al actuar ilegal llevado a cabo por agentes del Estado.

De esta manera, el daño moral ocasionado al demandante no es sino una consecuencia inmediata y directa de la detención, torturas y prisión política cometida por agentes del Estado, secuelas psicológicas y emocionales que han permanecido a lo largo de los años.

DÉCIMO TERCERO: Que, así las cosas, habiéndose determinado la existencia del daño moral sufrido por el demandante y la responsabilidad del Estado de indemnizar éste, corresponde fijar su cuantía en dinero, para lo cual el tribunal considerará el mérito de los antecedentes aportados al proceso, fijando el quantum indemnizatorio conforme a la entidad y naturaleza del daño ocasionado a la víctima que permita en algún modo reparar, mitigar o ayudar a sobrellevar el dolor causado por el hecho ilícito asentado, lo que se hará prudencialmente, ante la imposibilidad de fijar con alguna exactitud y



Foja: 1

certeza la suma que sirva a esos objetivos, a fin de cumplir con el principio de reparación integral que rige en la materia.

Así las cosas, el tribunal regulará la cuantía del daño moral en la cantidad total de quince millones de pesos (\$15.000.000).

DÉCIMO CUARTO: Que, la suma ordenada pagar deberá reajustarse conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor desde que la sentencia se encuentre ejecutoriada; y, respecto de los intereses, estos se devengarán a partir de la fecha en que la parte demandada se constituya en mora.

DÉCIMO QUINTO: Que, atendido lo dispuesto por el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, no habiendo resultado totalmente vencida y estimando que la demandada ha litigado con motivo plausible, se le eximirá del pago de las costas de la causa.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 47, y siguientes, 222 y, 224, 236, 1437, 1700, 1706, 2492 y 2518 del Código Civil; artículos 144, 160, 170, 342, 346, 384, 426, 427 y 428 del Código de Procedimiento Civil; Constitución Política de la República; Convención Americana de Derechos Humanos; y demás normas pertinentes, **se resuelve:**

I.- Que se **rechazan las excepciones** de reparación integral y prescripción deducidas por la parte demandada.

II.- Que se **acoge parcialmente la demanda**, interpuesta a folio 1, en consecuencia, se condena al Fisco de Chile a pagar a título de daño moral, la suma de quince millones de pesos (\$15.000.000) a favor del demandante Michel Georges Blin Vernier, con los reajustes e intereses consignados en el fundamento décimo cuarto precedente.

III.- Que se exime del pago de las costas a la parte demandada.

Notifíquese por cédula a las partes.

Anótese, regístrese, consúltese si no se apelaré, y archívese en su oportunidad.

ROL C-5169-2021



C-5169-2021

Foja: 1

Resolvió Paulina Valenzuela Negrete, Juez Suplente.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, treinta y uno de Julio de dos mil veinticuatro**



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XXDXXPVQEQC